**LA ARGENTINA POSNEOLIBERAL: UN BREVE RECORRIDO POR LOS AÑOS DEL KIRCHNERISMO[[1]](#footnote-1)**

**Por José Luis Coraggio[[2]](#footnote-2) y Pablo Míguez[[3]](#footnote-3)**

1. ***Advertencia***

*El análisis económico ortodoxo de un período histórico se basa en la medición de la evolución de variables cuantitativas seleccionadas de acuerdo a los modelos neoclásicos o keynesianos. Entre ellas hay efectivamente mecanismos de causalidad mecánica que están en la base de los análisis y proyecciones y que no pueden eludirse. Sobre esos mismos mecanismos no hay acuerdos fáciles, como ejemplifican los debates sobre las virtudes del manejo pro o contra cíclico de las políticas económicas en momentos de recesión. La economía política crítica supone además considerar a los actores económicos reales que están detrás del movimiento de las variables, sus motivaciones y estrategias, los conflictos de intereses y eventuales alianzas, las correlaciones de fuerza entre ellos, dando especial atención a las corporaciones económicas (empresariales o sindicales) y a las acciones estatales. A su ~~la~~ vez, aporta una imprescindible visión sistémica que no separa economía de política y que da un lugar importante a aspectos de más largo plazo como son los comportamientos cíclicos o el efecto de las revoluciones tecnológicas. Sin embargo, aun así predomina un estudio de “la economía” como un sistema de mercados más o menos regulados, por imperfectos que estos sean en los casos estudiados.*

*Al estudiar un proceso delimitado como “nacional”, hoy enfrentamos el hecho de que el sistema de mercados es global y que sus actores son predominantemente grandes grupos económicos de capitales asimismo globales: productivos, comerciales, financieros interpenetrados (así como sus representantes mediáticos, podríamos agregar). En el esquema desarrollista de los años 40-70s, se incluía entre sus objetivos el desarrollo modernizante de una red de mercados nacionales regulado, conectados, con autonomía relativa, con mercados externos, en relaciones protegidas por los respectivos gobiernos. Se hablaba de la relación contradictoria entre Estado y Mercado.*

*Esa red global de mercados dominados por la lógica capitalista atraviesa hoy las economías nacionales con una fuerza difícil de regular, menos aún de encapsular en un espacio nacional que, por otra parte, se fragmenta, en tanto sus economías subnacionales desaparecen o establecen relaciones directas con el exterior, donde la llamada “competitividad” del capital se basa en reducir costos laborales e impositivos en general y en expoliar la naturaleza. Tal globalización no es un fenómeno natural de evolución necesaria sino una construcción implementada de acuerdo a un proyecto neo-conservador capitalista, con un programa civilizatorio cuya estrategia central es la mercantilización de la vida humana y la naturaleza. Una construcción política, desde una política corporativizada, con alianzas de países del centro del sistema-mundo capitalista que buscan repartirse la periferia mediante la formación de bloques económicos que la incluyen de manera dependiente, con una institucionalidad global creada en las últimas décadas. La mayoría de los países periféricos que reciben inversión extranjera se han visto sometidos a ella, aunque sus efectos también se hacen sentir en el propio centro. Las guerras de ocupación son, entre otros, un instrumento “extraeconómico” de ese proyecto.*

*Ese proyecto tiene componentes de dominio económico y militar, pero a la vez busca sostener y ampliar un orden hegemónico a nivel global utilizando, por ejemplo, el control de los medios de producción simbólica y de comunicación, mercantilizados y concentrados. Treinta años de acción sistemática dirigida por la doctrina neoliberal a ultranza han creado un sentido común que hace de la participación competitiva a cualquier costo (social o ecosistémico) en el mercado mundial, el criterio predominante de organización de las economías “nacionales”.*

*Desafortunadamente, la búsqueda del grado necesario de autarquía a nivel nacional y regional a través de la transformación de la matriz productiva solo se asumió ~~asume~~ efectivamente cuando la restricción externa se hizo presente, en el caso de nuestros países cuando los precios de las commodities invierten su tendencia y la fuente de recursos para aplicar el principio de redistribución o la inversión pública y sus efectos de dinamización del mercado interno se debilitan. De igual modo, la caracterización como agentes económicos continúa limitada a las empresas capitalistas y las empresas públicas, sin haberse incorporado al imaginario neo-desarrollista las formas de organización asociativas, autogestionadas por los trabajadores, con potencial no sólo en el terreno material sino en el de constitución de nuevos sujetos socio-políticos.[[4]](#footnote-4)*

*Si en el período desarrollista no era suficiente con los análisis “económicos” para comprender los procesos de desarrollo capitalista periférico, hoy es imposible tal intento. La relación misma entre economía y sociedad (y política) están en juego y en camino a un desastre equivalente al provocado por el liberalismo a principios del siglo anterior, solo que magnificado y poniendo en juego no sólo los equilibrios sociales sino los del ecosistema planetario mismo.*

*Dentro del proyecto DR / RD, la economía social se propone analizar el período de gobierno de las llamadas “nuevas izquierdas” como parte de un proceso sistémico a distintas escalas (nacional, regional, global), no como una economía de mercado siguiendo un enfoque “economicista”[[5]](#footnote-5) sino como un proceso multidimensional, cuya articulación analítica se enmarca en el concepto de sistema hegemónico. Este incluye no solo elementos de predominio económico en los mercados sino la confrontación de proyectos de construcción de consensos y legitimidades entre bloques con pretensión hegemónica a nivel nacional, y sus respectivas apuestas de conformación de bloques sociales o, más ampliamente, de articulación contingente de los pueblos a partir de sociedades fragmentadas por la larga implementación del programa neoliberal.*

*La lucha por la hegemonía en el campo económico no puede así limitarse a variables o relaciones “económicas” en el sentido usual. Sin duda que las restricciones macroeconómicas ( restricción externa, etc.) ponen límites a la acción de los gobiernos, pero los comportamientos “económicos” de unos y otros no pueden separarse de la lucha política ni de los principios éticos, los valores y la lucha cultural por el sentido común, ni abstraerse de la hegemonía global del proyecto neo-conservador.*

*En este sentido, el modo de conformar y ejercer el poder es una cuestión crítica en el tipo de procesos nacional-populares latinoamericanos que estamos estudiando. Históricamente, la concentración de poder en una figura líder parece ser necesaria en el comienzo y durante la consolidación de una nueva hegemonía pero, si no se construye una institucionalidad democrática sustantiva con el desarrollo de actores sociales y políticos con capacidad de reconocer y organizar sus diferencias autónomamente, tal concentración del sistema de poder puede convertirse en una restricción política para la continuidad en momentos de necesario recambio de las personas.*

*Existen otras cuestiones ligadas a la consolidación de la hegemonía presentes en casi todos los recientes procesos latinoamericanos. En particular, al implantarse una relación líder-masa, puede esperarse comportamientos de masa, de contagio o imitación, manipulados o no por los medios de comunicación. Esto incluye la posibilidad de una falta de correlación entre la pertenencia de clase y el posicionamiento político. Así, la relación de contacto e influencia directa entre las clases medias y una parte de los sectores subordinados puede generar efectos coyunturales de adhesión y seguimiento no comprensibles para un enfoque de clases.*

*Tampoco la legitimidad o ilegitimidad de un gobierno puede fundarse exclusivamente en los resultados de sus políticas económicas, abstraídas de otras políticas usualmente no consideradas como económicas. Todo lo relacionado con el posicionamiento ante el proyecto hegemónico global en defensa de la soberanía, con los derechos humanos, con la afirmación de una identidad nacional, con la lucha contra el colonialismo, la construcción de un “nosotros” nacional y global alrededor de cuestiones críticas, el logro de una confianza y afecto en los dirigentes, y otros lineamientos nacional-populares contribuyen a que un gobierno pueda tomar o proponer acciones “económicas” que incluso afectan los intereses de parte de su bloque social de referencia o de la sociedad en general, algo que no podría hacer legítimamente bajo otras condiciones.*

*Por el otro lado, no es menos importante la forma en que los sectores son convocados a formar parte del proceso. Medidas que favorecen materialmente a un sector son fundamentales para integrarlo al proyecto nacional-popular o neutralizarlo, pero si el apoyo que se busca es pasivo no pueden por sí solas asegurar su consenso a través de las coyunturas, siendo compatibles con respuestas oposicionistas y muestras de insatisfacción basadas en otras razones que resultan sorprendentes para una visión cerradamente utilitarista de las motivaciones políticas.*

*Aquí es también imprescindible superar la concepción de que los sujetos socio-económicos pueden identificarse con agregados sectoriales de actores definidos de manera inmediata en la esfera usualmente considerada como “económica”, como por ejemplo: propiedad de medios de producción, intereses particulares, funciones, peso y orientación hacia unos u otros mercados como el nacional y los externos. El diseño e implementación de las políticas económicas es un recurso fundamental, poco utilizado, para contribuir a la configuración de nuevos sujetos afines a un proyecto nacional-popular (o su opuesto).*

*Para la economía social los sujetos sociales se configuran por esos factores pero también por posiciones ideológicas y políticas, como es el caso de la llamada “burguesía nacional” o de la misma clase obrera. A esto se agrega la necesidad de un análisis más fino de los intereses materiales de distintos sectores en una economía con estrategias diversificadas. En el caso de la Argentina, la difusión de la propiedad agrícola con el surgimiento de los pools de siembra puede explicar en parte la afinidad de sectores medios urbanos con los intereses del agronegocio.*

*En todo caso, siendo indispensable encarar el estudio de los procesos económicos dentro de una matriz conceptual provista por la categoría de orden hegemónico, estamos frente a un movimiento complejo en direcciones opuestas: la lucha por la hegemonía nacional de un proyecto con sentido popular, en el contexto de un campo de fuerzas donde los sectores neo-conservadores pugnan por la hegemonía a nivel global. Y los avances en lo primero dependen o son interdependientes con las coyunturas de lo segundo. De hecho, las fuerzas de “las nuevas derechas” son esencialmente representantes locales del proyecto neo-conservador, lo que les da una seguridad y agresividad que no tendrían si estuvieran basadas solamente en el juego de fuerzas interno.*

*La regionalización supranacional de los procesos de lucha por otro orden hegemónico pasa a ser un factor fundamental para, entre otras cosas, hacer menos probable un “efecto dominó” cuando uno de estos procesos con “nuevas izquierdas gobernantes” se debilita. En esto, avanzar conjuntamente hacia la consolidación de una base económica viable y socialmente integrada es fundamental. Pero también lo es el avance hacia la constitución de sujetos colectivos relativamente autónomos, portadores del proyecto nacional-popular y articulados como pueblo, con un sistema político crecientemente democrático. Y la constitución de una parte importante de esos sujetos requiere una base material y en particular el desarrollo de otras formas de organización económica y de propiedad. En ese sentido, reducir la economía mixta a la contraposición entre economía pública y “privada”( empresas capitalistas) sería ignorar la necesidad de un sector orgánicamente solidario de economía popular y en particular el potencial de las organizaciones y redes autogestionadas o cogestionadas solidariamente por sus trabajadores. O no tener en cuenta el papel que pueden jugar comunidades territoriales organizadas que definen y asumen una parte de su reproducción y desarrollo, algo más profundo que la pretendida inserción de las “economías regionales” en nichos del mercado global.*

*Por difícil que sea, avanzar en el pensamiento y la realización de estas condiciones es necesario para evitar la reversibilidad de estos procesos de resistencia ante las fuerzas hegemónicas a nivel global. Limitar lo revolucionario a instalar un programa económico que afirme lo nacional frente a los poderes globales y lo popular redistribuyendo ingresos y ampliando el acceso a bienes públicos, parece ser un camino incompleto si no va acompañado de una revolución política y económica que pueda sostener el proyecto nacional-popular a través de las inevitables crisis económicas.*

*Esta primera presentación sobre el proceso económico experimentado por la Argentina durante los gobiernos kirchneristas se basa en la hipótesis de que hay una determinación no externa entre economía y política, relación que, sobre todo bajo instituciones sustantivamente democráticas, debe ser investigada desde la perspectiva de las confrontaciones entre proyectos y fuerzas que pugnan por establecer un orden hegemónico determinado. Mucho resta por investigar e interpretar, pero se somete esta anticipación para su discusión entre los nodos del proyecto Democracias en Revolución & Revoluciones en Democracia.*

1. **La crisis del neoliberalismo (y del sistema de la Convertibilidad)**

Argentina inicia su camino por la senda neoliberal con la primera presidencia de Carlos Menem, cuya llegada anticipada al poder fue resultado del proceso hiperinflacionario de 1989 que terminó con el gobierno de Raúl Alfonsín. Durante sus dos gobiernos (1989-1994) y (1994-1998) se produjeron las mayores transformaciones económicas y políticas desde la llegada de la democracia en 1983, orientadas por el proyecto neo-conservador de alcance global cuya doctrina económica es el neoliberalismo. Sin embargo, podríamos decir que los aspectos principales de ese proyecto podrían rastrearse hasta finales de los años 70, ya que tienen el antecedente de las políticas económicas impuestas por la dictadura militar del 76-83. A su vez esta dictadura tenía como antecedente regional la de Pinochet y el desembarco de los llamados “Chicago Boys”. Cabe destacar que durante la dictadura se consolidó una nueva burguesía que fue denominada la “Patria contratista” por haberse enriquecido a través de contratos con el Estado y cuya deuda externa sería estatizada por Domingo Cavallo en 1982. En ese proceso se formó el grupo económico de la familia Macri. El retorno a la democracia con el gobierno del partido radical encabezado por Raúl Alfonsín no pudo superar esa herencia del gobierno militar, lo que, mediado por acciones políticas de los grupos económicos, condujo a pujas distributivas, ajustes heterodoxos, al fracaso de la política monetaria y la nueva moneda (Austral), a una fuerte brecha cambiaria y corridas bancarias generando una hiperinflación de tres dígitos que caotizó la vida cotidiana de la población y profundizó lo que puede caracterizarse como una crisis hegemónica. La instauración de la convertibilidad de la moneda y su paridad con el dólar, la conversión del Banco Central en una institución independiente del gobierno y la renuncia a la política monetaria, la reducción del tamaño del Estado vía la privatización de empresas públicas y la descentralización de sus funciones, fueron acompañadas de una apertura comercial y financiera inédita y la flexibilización del mercado de trabajo.

El fantasma de la hiperinflación parecía justificar ese tipo de medidas y el consenso pasivo por parte de la población se veía sustentado por cierto éxito en la “estabilidad” de precios, que se convirtió en un valor en sí mismo, y que un amplio espectro de la sociedad no estaba dispuesto a poner en riesgo. Previamente se habían creado condiciones para lograr ese consenso, como el deterioro provocado de los servicios públicos de modo que la población ansiara cambios. Este conjunto de políticas fue llevado adelante por Menem pero especialmente por el ministro de economía Domingo Cavallo, quien se adjudicaba frente al presidente el ser “el verdadero padre del modelo” ya que las principales medidas - la ley de Convertibilidad y la ley de Reforma del Estado- se tomaron bajo la influencia de su ministerio, que concentraba casi todas las funciones económicas relevantes que garantizaban la reducción del papel del estado en la regulación de los mercados.

Con un tipo de cambio fijo por ley y sumamente apreciado, durante casi toda la década de los 90’ la posibilidad de exportar bienes se vio sumamente reducida, al tiempo que se abarataba la importación de insumos y de bienes, sobre todo suntuarios. Esto generó en los primeros años cierto “efecto riqueza”, que se vio alimentado por el hecho de darse después de las grandes restricciones al consumo de la década del ochenta y de la sensación anómica de quedar “al borde del abismo” en la hiperinflación del 89. La falsa prosperidad de los primeros años noventa dependía del endeudamiento externo y de la entrada de capitales, ambos procesos favorecidos por las privatizaciones de las empresas del Estado, lo que iba a chocar en 1994 con la crisis derivada de la fuga de capitales generada por la crisis de México. En efecto, la crisis del “efecto tequila” mostró los límites de sostener la acumulación en base a la generación de condiciones favorables para la llegada de capitales externos. Fue la primera llamada de atención para un gobierno que creía haber encontrado la receta para la inserción del país en la economía mundial al acomodarse a los mandamientos del Consenso de Washington y que advertía de los problemas de un esquema de *currency board*. Pero la tormenta pasó con daños menores y el gobierno fue reelecto, en alguna medida por la influencia de lo ~~parte por lo~~ que mediáticamente se llamó “voto cuota” (en referencia al miedo a un cambio de las reglas monetarias y a sus consecuencias sobre las cuotas de las deudas, nominadas en pesos-dólares, derivadas del uso de tarjetas de crédito). Un efecto de la convertibilidad fue aumentar la tendencia a la dolarización de la economía, lo que aún subsiste como ejemplo de la penetración de la ideología neoliberal en el sentido común.

Este período puede caracterizarse como de hegemonía de un bloque orientado por el proyecto neo conservador, obediente de las consignas del “Consenso” de Washington instrumentadas por el FMI y el BM, que pusieran a Menem como el “mejor alumno” de sus enseñanzas. Se daba la implementación, ahora bajo instituciones democráticas, de un proyecto de liberación del mercado, abierto a las fuerzas globales, del desguace del estado mediante la privatización a manos de grupos económicos nacionales e internacionales y la reducción de sus funciones regulatorias. Esto con un apoyo pasivo de la sociedad, disciplinada por los temores desatados por el período de dictadura, la hiperinflación y la amenaza del desempleo y subempleo, amplificado por la flexibilización laboral ante un sindicalismo debilitado. La lucha desde el campo popular se basaba no solo en las demandas sociales ante los efectos de las políticas públicas sino también en el rechazo a la corrupción y a la traición al mandato popular que había llevado a Menen a la presidencia, todo esto sin cuestionar todavía a fondo el programa económico neoliberal, asumiendo que se trataba de un problema de mala gestión del gobierno de turno.

En efecto, la Convertibilidad era incuestionada, los problemas de corrupción eran los reclamos que los sectores medios hacían notar y los sectores de la clase obrera y los trabajadores desocupados comenzaban a sospechar que la flexibilidad laboral y la pérdida de peso del actor sindical que traían aparejadas tendrían consecuencias permanentes y difíciles de revertir dentro de este esquema neoliberal. La derrota del menemismo en 1999 se produce por la agrupación de la oposición en una alianza que concentraba a numerosos sectores anti-menemistas, que no toleraban las formas aunque no revertirían las bases del plan de convertibilidad. A tal punto que, ante los primeros cuestionamientos a los intentos de ajuste fiscal, el gobierno del radical De la Rúa (10 diciembre 1999-20 diciembre 2001) va a convocar al propio ex-ministro Cavallo (que representaba el modelo menemista del que había sido artífice, y que se había presentado como candidato a la presidencia y obtenido el tercer lugar detrás del candidato justicialista Eduardo Duhalde) a que se ocupara nuevamente de la conducción de la política económica, lo que mostraba el consenso que la misma todavía tenía a pesar del cambio de gobierno.

Es durante el gobierno de la alianza que la lucha contra-hegemónica comienza a enfrentar con fuerza al proyecto económico neoliberal personificado en los varios ministros de economía, a través de reacciones con un alto componente espontáneo y auto-convocado desde la sociedad antes que del sistema político institucionalizado, el que perdía legitimidad por su incapacidad de plantear alternativas ante el fracaso del programa neoliberal y asumir la representación de la sociedad. Las luchas que comenzaban a darse en el interior del país empiezan a hacerse sentir a partir de los conflictos encabezados por el emergente movimiento de “piqueteros”, trabajadores desocupados que iniciaban el ciclo de protesta que terminaría cuestionando la propia convertibilidad y el sistema político en general. Estos movimientos iban a ser actores relevantes de las políticas postneoliberales tras la crisis de 2001.

1. **La impugnación del neoliberalismo: el final de la Convertibilidad en 2001**

El debilitamiento de la hegemonía del proyecto neoconservador tomó forma a partir de la confluencia circunstancial de diversos sectores sociales afectados por los efectos del programa neoliberal que mostraban su fracaso, así como por el modo de gestión política de la crisis por el gobierno. El crecimiento de la pobreza, el alto desempleo y la recesión posterior a 1998 complicaban cada vez más el mantenimiento del sistema de convertibilidad. Las condiciones para refinanciar el endeudamiento empeoraban crecientemente, al tiempo que las resistencias al ajuste se hacían sentir en todo el territorio nacional, especialmente en el interior del país, donde las privatizaciones y el ajuste fiscal se hacían sentir con mucha más fuerza en unas debilitadas economías regionales. Además, a esa altura se exacerbaba el conflicto entre las fracciones empresariales acerca de cómo se iba a distribuir la carga de la salida de la convertibilidad, desde las posiciones de las fracciones partidarias de la dolarización abierta (esencialmente empresas privatizadas y bancos) hasta las fracciones defensoras de una devaluación (esencialmente empresas ligadas a la producción para el mercado interno).

Así es como durante 2001, en un contexto de aumento considerable de la protesta social, la salida de capitales y de depósitos bancarios se agudizó considerablemente y llevó a la instauración en diciembre del “corralito bancario” para limitar el retiro de depósitos de los bancos. La reacción de los sectores medios y populares terminó en una serie de movilizaciones espontáneas en que convergían diversas reivindicaciones desatendidas por el gobierno y en la insurrección del 19 y 20 de diciembre, que llevó a De la Rúa a reprimir primero y a renunciar después ante una situación de ingobernabilidad extrema. Su salida implicaba el final de la convertibilidad, la suspensión del pago de la deuda externa y, más ampliamente, la caída del consenso neoliberal. Se produjo así una crisis de hegemonía y en particular de representación, que alcanzaba a todos los partidos políticos, ilustrada por la consigna “que se vayan todos”. Al igual que en otros procesos en la región, es la lucha popular contra las políticas neoliberales lo que precipita la caída del gobierno, abriendo la posibilidad de construir un nuevo bloque social y un nuevo bloque hegemónico. Sin embargo, la perduración de la colonización cultural construida desde la dictadura del 76 y la fragmentación social no necesariamente iban a disolverse sin una acción política deliberada, que fue organizada como proyecto nacional-popular desde el 2003 por el Kirchnerismo.

Luego de los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001, el presidente provisional Rodríguez Saá declara el default de la deuda externa, resultado inevitable de la herencia de la dictadura y diez años de políticas neoliberales en democracia, donde se habían dado simultáneamente procesos de privatizaciones y endeudamiento del Estado. El gobierno declaró el default por razones de imposibilidad económica, es decir, porque no tenía recursos para pagar la deuda (aunque hubiera querido hacerlo) y porque los mecanismos de refinanciación habían llegado a su límite luego de probar su ineficacia para salir de la crisis, derivada del crecimiento de una deuda impagable que la hacía crecer exponencialmente cada vez que se renegociaba.

En efecto, además de los efectos negativos sobre el campo social, el empleo y el entramado productivo, en buena medida la crisis del modelo neoliberal fue el resultado de sucesivas emisiones de deudas necesarias para mantener el sistema de la convertibilidad. El gobierno de Menen había tomado el poder en 1990 con una deuda externa total de casi 63.000 millones de dólares y salió dejando un pasivo de 110.000 millones, eso después de haber implementado las reformas neoliberales y privatizado gran parte del patrimonio del Estado. A su vez, de la Rúa se fue del poder dejando una deuda de 144.000 millones en diciembre de 2001, de los cuales alrededor de 70.000 millones correspondientes a algunos de esos bonos fueron alcanzados por el default de diciembre de 2001.

En resumen, luego de una década neoliberal la situación externa sólo había empeorado. Las reservas caían en picada y llevaron al “corralito” de comienzos de diciembre de 2001.

1. **Inicio del camino hacia el pos-neoliberalismo: los primeros años de la post-convertibilidad.**

Tras la salida anticipada de De la Rúa la crisis económica e institucional era muy grave. Una sucesión de presidentes en diez días culminó con la consolidación de Eduardo Duhalde como el presidente temporal hasta la realización de nuevas elecciones. Durante 2002 iba a costar muchísimo estabilizar la situación política por la grave situación de los sectores populares después de diez años de reformas neoliberales, donde la pobreza, el desempleo y la falta de expectativas hacían muy difícil la recuperación de la confianza en las instituciones democráticas, particularmente de los partidos políticos, para sostener niveles aceptables de vida de la población. Lentamente se fueron buscando formas de compensar a los afectados por la pesificación de los depósitos y créditos bancarios- esto es, los bancos y los depositantes- lo que se hizo asimétricamente (se liberaba el tipo de cambio que lo iba a fijar el mercado después de casi una década de paridad con el dólar y los depósitos se reconocían 1,4 $ por dólar mientras que los créditos equivaldrían a 1 peso por dólar, lo que generaba gran incertidumbre para todos), con mayor endeudamiento estatal (ya se emitían cuasi monedas en algunas provincias) y con medidas asistencialistas de urgencia para los sectores más afectados dirigidas a lograr cierta gobernabilidad política. La emisión de bonos permitió a los bancos recomponer su cartera de activos pero muchos de los depositantes que no pudieron retirar sus ahorros antes de la devaluación, personas de clase media en su mayoría, debieron aceptar condiciones más gravosas y esperar el pago futuro de los bonos como única alternativa ante una pérdida más importante de su patrimonio. La incertidumbre llevaba a acentuar comportamientos individualistas de “sálvese quien pueda” a la vez que surgían nuevas solidaridades como la de los piqueteros, o experiencias autoconvocadas como las de las asambleas que se multiplicaron en las principales ciudades del país, debatiendo cómo interpretar lo que ocurría, qué reivindicar y en muchos casos cómo actuar directamente para resolver problemas locales y recuperar empresas quebradas por la crisis.

La liberación del tipo de cambio desde febrero de 2002 provocó la depreciación del peso, que en pocos meses pasó de 1,4 a 3,5 pesos por dólar, generando una caída de las reservas internacionales de 14.000 a apenas 9.700 millones de dólares en junio. El año 2002 fue un año de crisis generalizada, caída del producto, crecimiento de la desocupación, movilización política, protesta social y enorme incertidumbre respecto del futuro de las instituciones del sistema político, sin que hubiera a la vista una fuerza capaz de dirigir la vida social.

El gobierno de transición de Duhalde apenas pudo gestionar el conflicto social, y debió adelantar las elecciones a mayo de 2003 luego de que su legitimidad se viera erosionada por la represión a diferentes movimientos sociales.

1. **Comienzo de la era kirchnerista: Néstor Kirchner en el poder**

La llegada al poder de Néstor Kirchner en mayo de 2003 fue más el resultado del voto negativo ante la posibilidad de continuidad del proyecto neoliberal que la adscripción a un proyecto alternativo estructurado. El caudal de votos logrado era extremadamente limitado, en parte por la táctica de Menem, que había pretendido ser reelegido luego del período de gobierno de la Alianza y que decidió no presentarse a una segunda vuelta electoral, para que el nuevo gobierno llegara como una primera escasa minoría. Sin una base social organizada, el gobierno fue dando respuesta a las demandas de numerosos sectores movilizados y buscó apuntalar su liderazgo - que comenzó con una legitimidad escasa- así como la reconstrucción del poder de las instituciones estatales, fuertemente desacreditadas y consideradas responsables del colapso social previo y posterior al estallido del 2001. Recién a partir del gobierno de Kirchner iban a consolidarse elementos de consenso político, económico y social que pudieran ser base de un nuevo orden hegemónico contrapuesto al que había imperado en los años noventa y hecho crisis al fin de la década. Ello implicaba recuperar la política misma, como práctica legítima de construcción de la sociedad.

Kirchner tomó rápidamente la iniciativa política asumiendo el cuestionamiento social a los partidos políticos, incluido el mismo partido peronista, inicialmente controlado por el expresidente provisional Duhalde, mientras mantenía al mando de la economía a Roberto Lavagna, el último ministro de Duhalde. Las primeras medidas para crear las bases de una nueva hegemonía fueron simbólicamente relevantes ya que se impulsó el recambio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación -la corte “adicta” al menemismo- y el descabezamiento de la cúpula de las Fuerzas Armadas, lo que sumado a la política de protección de los Derechos Humanos contribuyó a asociar al “kirchnerismo” simultáneamente con los ideales populistas del primer peronismo y de la lucha contra la dictadura militar.

En materia económica era necesario tomar medidas urgentes para salir de la crisis, reactivar la economía y reducir la desocupación. La devaluación de la moneda iba a permitir cierta sustitución de importaciones y una lenta recuperación de la actividad industrial, que operaba a la mitad de su capacidad a partir de la descomposición del tejido productivo generado en los años previos. El gobierno apostó a lograr los comportamientos que necesitaba como respuesta a incentivos económicos inducidos por las políticas públicas, sin conformar una alianza política con el sector empresarial que hubiera limitado su campo de acción. Con una herencia de altísima extranjerización del sector empresarial, iba a reaparecer de hecho la vieja cuestión de si existía o no una burguesía nacional desarrollista y qué posibilidad había de que fuera creada desde el gobierno.

Salir de la crisis económica implicaba afrontar los vencimientos de la deuda que no había sido declarada en default (con organismos internacionales como el FMI) y compensar con emisión de deuda las pérdidas de los bancos y de los ahorristas (BODEN) por la pesificación asimétrica. Del mismo modo se debían absorber las cuasi-monedas utilizadas por las provincias así como la deuda de éstas frente a acreedores externos e internos. Ello requería además una reestructuración de la deuda declarada en default, esto es, especialmente de los títulos públicos en poder de residentes extranjeros.

Durante 2002 y 2003 la caída del peso había derrumbado las importaciones, por lo cual, por primera vez en muchos años, se constató un superávit comercial. Al final del 2003, con la postergación del pago de intereses de la deuda declarada en default y con la obtención de 9000 millones de dólares en concepto de retenciones a las exportaciones agrícolas se obtuvo un superávit fiscal considerable, lo que permitió acumular reservas hasta unos 14.000 millones de dólares.

En los años siguientes y hasta 2008 se obtuvieron superávits comerciales y fiscales importantes, que permitirían solventar los mayores gastos del estado y en particular las políticas sociales que la crisis social hacía necesario activar para cumplir con las promesas electorales y consolidar el apoyo popular, condición para una gobernabilidad que permitiera efectivizar un modelo que fue definido como de *crecimiento incluyente.* Se asistió a un período (2003-2008) de crecimiento acelerado de la producción –con predominio del sector agrario alentado por los altos precios de las *commodities*- y de mejora de las condiciones de vida de una población que venía de muchos años de postergaciones y desesperanzas. El gobierno continuaba protegiendo su autonomía de los grupos corporativos buscando su apoyo pasivo, basándose en los incentivos económicos, la recuperación de las ganancias del capital y la expansión de la demanda interna impulsada por la creciente inversión pública y la fuerte mejoría de los ingresos de los sectores medios y bajos de la población tanto en las ramas agrarias como financieras, de servicios e industriales. La sucesión de medidas que se fueron tomando en diversos campos con base en la captación, inversión y redistribución de recursos originados en los altos precios de las exportaciones le permitieron mantener la iniciativa política y reforzar el liderazgo de Néstor Kirchner en la dimensión más sentida por la población: un nuevo orden económico, previsible e incluyente. Así, la sistemática política de recuperación y formalización del empleo y la reinstitucionalización de los derechos de los trabajadores, así como las diversas políticas orientadas a asistir a los sectores más pobres, fueron un factor decisivo en la afirmación de la legitimidad del gobierno.

La devaluación de la moneda realizada en 2002 comenzaba a mostrar sus efectos en tanto se producía lentamente cierta sustitución de importaciones, lo que contribuía a recuperar el empleo y de esa forma, junto con los masivos planes sociales otorgados en esos primeros años, comenzaba a mejorar la situación de los sectores más afectados por las políticas neoliberales. A nivel macroeconómico, los primeros años del kirchnerismo mostraron fuertes superávits comerciales como resultado de la devaluación junto con superávits fiscales derivados del aumento de recursos fiscales, sobre todo de la recaudación de impuestos al consumo y del sector externo. Los “superávits gemelos” junto con la lenta recuperación del consumo y de la inversión generaron las condiciones macroeconómicas ideales para aprovechar la circunstancia inédita del aumento de los precios de los *commodities*, esto es, la reversión del deterioro de los términos del intercambio para todos los países latinoamericanos entre 2003 y 2008.

Esta dinámica económica apoyada en el crecimiento de la demanda a partir del uso pleno de la capacidad instalada favoreció la reducción paulatina del desempleo y junto con las retenciones agrícolas de casi 10.000 millones de dólares permitieron a fines de 2005 recomponer las reservas del Banco Central hasta llegar a los 20.000 millones. Mantener las reservas permitió al gobierno sostener estable el tipo de cambio en torno a los tres/cuatro pesos por dólar. Asimismo, la administración de impuestos comenzó a ponerse más estricta con la evasión y empezaron a percibirse ingresos fiscales considerables acompañando la reactivación de la economía.

Así es como se llega a 2005 en condiciones de afrontar una reestructuración de la deuda (una quita y una reprogramación de los vencimientos). El gobierno de Néstor Kirchner atravesaba el mejor momento del mercado internacional, lo que favoreció la política de pago de la deuda externa con el FMI y la primera reestructuración (una enorme quita y refinanciamiento) de la deuda “defaulteada” en 2001. En ese año, la deuda pasó de 191.000 a 126.000 millones de dólares, lo que configuraba una quita del 75% de la deuda declarada en default, una de las mayores otorgada a un estado desde la posguerra.

La reestructuración se hizo primero en 2005 y consistió en un canje voluntario de bonos “viejos” defaulteados por bonos nuevos por casi 82.000 millones de dólares, ya que a los 102 mil millones originales no se les reconocieron los 20.000 millones de intereses generados entre diciembre de 2001 y diciembre de 2003. El 76% de los acreedores aceptó los bonos nuevos del canje por lo que el Estado emitió nueva deuda por 35.000 millones que equivalía a 62.000 millones de la deuda vieja, es decir, obtuvo una quita considerable, en una de las más grandes reestructuraciones de deuda soberana antes de Grecia en 2010. Se imponía a su vez la ley cerrojo que prohibía reabrir la negociación, con lo cual los acreedores aceptaban esa oferta o esperaban a litigar. El 24% que no entró al canje representaba unos 20.000 millones de dólares, entre los cuales había fondos buitres y otros inversores, para los cuales el gobierno va a ofrecer posteriormente una reapertura en 2010 y otra en 2014.

Se terminaba el 2005 con reservas internacionales cercanas a los 28.000 millones de dólares, con lo cual se creaban las bases para un fuerte aumento de la inversión, ante la mayor previsibilidad que suponía esa base de activos internacionales para la acumulación del capital. El crecimiento de la inversión ya no era solo por el uso pleno de la capacidad industrial instalada y benefició a sectores capitalistas relegados durante la convertibilidad, donde se había beneficiado especialmente a las empresas de servicios públicos privatizadas por el menemismo y al sector financiero. En el caso de las empresas de servicios públicos se les otorgaron subsidios para no trasladar a las tarifas las pérdidas de la devaluación, pudiendo así mantener el poder del salario real, que iba ascendiendo lentamente hasta alcanzar los niveles previos a la crisis.

En diciembre de 2006, mientras que se acumulaban reservas por 32.000 millones de dólares, la pobreza se había reducido del 50 al 27% y la desocupación al 10%. La inversión estatal en bienes públicos de acceso gratuito, como la educación de todos los niveles, que llevó el gasto en ese sector del 3,6 al 6,2 % del PBI en 7 años, los servicios de salud, y los programas de vivienda, entre otros, se sumaron a las políticas sociales focalizadas en los sectores de máxima pobreza. Sin embargo, la situación de los sectores populares era muy heterogénea según se tratase de desocupados o trabajadores, trabajadores no registrados o registrados (y a su vez, si estaban o no sindicalizados). Así, estos últimos se beneficiaban del retorno de las negociaciones salariales en las paritarias desde 2004, así como de la fijación de salarios mínimos y las políticas de formalización del empleo, lo que iría incrementando la participación de la masa salarial en el PIB acercándolo a los máximos históricos del 50% bajo el gobierno de Perón.

Por su parte, los sectores no asalariados formalmente ni integrados al mercado por cuenta propia recibían planes sociales propiciando su autoempleo en microemprendimientos asociativos autogestionados, bajo el título de “economía social” pero fundamentalmente eran objeto de políticas sociales redistributivas. Posteriormente, estas políticas se institucionalizarían como derechos a través de la Ley de Inclusión Jubilatoria del 2005 y en 2009 con la generalización de la Asignación Universal por Hijo. En 2008, la estatización del sistema de seguridad social iba a recuperar y capitalizar los fondos privados de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) permitiendo formar un fondo de inversión social y recuperar el derecho universal a servicios básicos de salud y a la jubilación de amplios sectores que habían sido excluidos por la privatización del sistema.

Las presiones inflacionarias, provocadas por el incremento de la demanda interna sin una correspondiente inversión privada, llevaron al gobierno a intervenir el INDEC, el Instituto productor de los principales indicadores económicos, comenzando un período de baja credibilidad de los datos oficiales sobre la economía, lo que iba a culminar en 2014 con la decisión de no seguir estimando índices oficiales de pobreza. A esto se sumó el estilo agresivo de intervención en la formación de precios y el control de las importaciones instaurados desde la Secretaria de Comercio Interior desde el 2006, todo lo cual jugaba un papel deslegitimador del gobierno, particularmente en los sectores medios.

1. **Convalidación electoral del proceso: se inicia la primera Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner**

La reactivación económica (el país creció al 8 y 9 % anual en esos años) y el encauzamiento relativo de la institucionalidad política permitieron la consolidación del gobierno de Néstor Kirchner y facilitaron la elección de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) como presidenta en 2007, sostenida por los sectores populares que veían en la continuidad del kirchnerismo la garantía del “modelo de crecimiento con inclusión social”.

En ese momento se intentó una alianza con el partido radical, expresada en la ocupación de la Vicepresidencia por un representante de dicho partido. El ya denominado “kirchnerismo”, a partir de la experiencia del Frente para la Victoria iniciado en 2003, había intentado con poco éxito conformar una organización política transversal propia. Ese fracaso llevó a Néstor Kirchner a retomar el control del partido justicialista. En esa oportunidad, propuso que el PJ saliera de la internacional Demócrata Cristiana e ingresara a la Internacional Socialista.

El gobierno de CFK buscaría consolidar el proyecto iniciado por su esposo pero en un contexto económico que comenzaba a mostrar ciertos problemas, propios de una estructura económica que no podía sostener indefinidamente esos niveles de crecimiento y redistribución.

Así, los altos niveles de crecimiento del producto aumentaron la demanda de energía, que debió importarse del exterior, y comenzaron a notarse ciertos signos de desequilibrio que más tarde serían objeto de políticas más urgidas por las circunstancias y con menos márgenes de maniobra. Sin embargo, el gobierno no utilizó el mecanismo de los decretos de necesidad y urgencia, heredado del menemismo, lo que sería reafirmado con la nueva correlación en el sistema parlamentario en alianza con representaciones menores que permitían alcanzar las mayorías necesarias, siguiendo una estrategia de respeto a la institucionalidad, lo que neutralizaba la acción de las fuerzas de la oposición para deslegitimarlo. La necesidad de recursos llevó a un perfeccionamiento del sistema fiscal heredado, aumentado la presión tributaria sobre las ganancias y los ingresos medios.

La subida de los salarios y los precios empezó a acelerarse, con lo cual el tipo de cambio comenzó a apreciarse y el superávit externo a reducirse. Sin embargo, las reservas internacionales alcanzaban los 43.000 millones de dólares y no había mayores motivos para alarmarse, teniendo en cuenta la mejora rotunda de la situación de los sectores populares que apenas cinco años antes atravesaban una de las peores crisis sociales, sino la peor, de la historia argentina.

Desde la perspectiva de la construcción de un liderazgo moral del Kirchnerismo en confrontación con los valores neo-conservadores, una buena gestión de la economía era condición de legitimidad, pero de por sí no conformaba un nuevo orden hegemónico. Así, se irían incorporando otras acciones de resistencia al proyecto neo-conservador: aunque manteniendo buenas relaciones se sostuvo una posición firme ante intervenciones invasivas del gobierno del EEUU; cancelación de la deuda con el FMI, librándose de la supervisión de ese organismo; afirmación de la soberanía frente al proyecto norteamericano del ALCA; afirmación de la soberanía sobre las Islas Malvinas en el marco de un planteo anticolonial en las NNUU; nacionalización o retiro de concesiones de empresas extranjeras que saboteaban sectores estratégicos; alianza con otros gobiernos de la región para el fortalecimiento del Mercosur y la creación de nuevas institucionalidades regionales como UNASUR y CELAC; afirmación de la responsabilidad del Estado en la defensa de los derechos humanos y de la no impunidad de sus violadores durante la dictadura; propuesta de principios para tratar la reestructuración de las deudas soberanas que fuera asumida por resolución de las NNUU; reorganización de la Corte Suprema de Justicia menemista y reforma del Consejo de la Magistratura; reglamentación del uso de los decretos de necesidad y urgencia devolviendo atribuciones al parlamento. En el campo socio-cultural: prioridad a la educación en todos sus niveles y al acceso a la ciencia y tecnología; afirmación de valores históricos de la cultura nacional; reconocimiento de derechos asociados a la identidad y demás aspectos que contribuían a la afirmación de un liderazgo moral que a su vez alimentaban la posibilidad de tomar iniciativas, particularmente en el campo económico.

A la vez, se iba consolidando un estilo de gobierno, con ventajas y debilidades, centrado en la relación líder-masa antes que en el reconocimiento, fortalecimiento y diálogo con organizaciones sociales autónomas, que generaba rechazo de los sectores medios y de algunas organizaciones sociales no consideradas como protagonistas y se producían acciones que se resistían a esa nueva hegemonía. Ya en 2004 la cuestión de la seguridad había producido la primera manifestación multitudinaria de una clase media urbana, alrededor del asesinato en ocasión del robo a un hijo del señor Blumberg, iniciando una serie de acciones y reacciones para afirmar o cuestionar la legitimidad del gobierno en las calles, mediante “cacerolazos” o cierre de vías (que traían el recuerdo de las protestas de los sectores medios contra el gobierno de la Unidad Popular en Chile). El gobierno, por su parte, sancionó la no represión ni criminalización de las protestas, así como la no judicialización de las expresiones mediáticas opositoras, cualquiera fuera su contenido. De hecho, el gobierno experimentó campañas especulativas basadas en rumores, que detonaron fenómenos económicos negativos como fue el caso alrededor de la pretendida devaluación del peso, que generó importantes sangrías en las reservas y terminaría generando una presión continua por salidas de divisas y un mercado paralelo.

1. **El conflicto del “campo”: revés y reposicionamiento de la acción gubernamental**

Para sostener el ritmo del crecimiento, agotada la capacidad ociosa ante la demanda acrecentada, la inversión privada debía seguir creciendo, pero los sectores empresariales comenzaban a mostrar cierta reticencia ante el aumento de los costos laborales y fiscales. El comienzo de una crisis financiera internacional hacía pensar en un horizonte complejo que ameritaba aumentar los ingresos fiscales. Así es que, entre otras medidas, el gobierno decidió aumentar abruptamente y de manera indiferenciada el porcentaje de retenciones a la exportación de granos. Para captar una parte mayor de la renta agrícola por medio de la resolución 125/08 se imponían retenciones móviles según el precio internacional de los cultivos. Esto suscitó una resistencia activa por parte de la burguesía agraria, mediante sabotajes al abastecimiento y la liquidación de las exportaciones, dando comienzo a principios del 2008 al llamado “conflicto del campo”. Luego de varios meses de cortes de rutas y movilizaciones de los distintos sectores terratenientes agrupados en la “Mesa de Enlace” la medida fue bloqueada con la anuencia del propio vicepresidente Julio Cobos.

En términos políticos el conflicto significó un duro revés para el gobierno y articuló a diferentes sectores de la oposición en torno a distintos reclamos que hasta entonces no podían prosperar dada la desigual relación de fuerzas. Este conflicto supuso un fuerte quiebre en el proceso y condicionó las políticas posteriores del kirchnerismo~~.~~

Esta coyuntura iba a favorecer la conformación de un bloque de oposición que articularía sectores empresariales agropecuarios y bancarios con sectores sociales medios y un fuerte papel de los medios de comunicación concentrados, bloque que iba a perdurar hasta el presente y que iba a encontrar una ambigua contrapartida política en los partidos de oposición. Su ubicación oposicionista a ultranza llevaría a generar una polarización ideológica fuerte en tanto se manifestaban en contra de las iniciativas progresistas del gobierno y se producían alianzas circunstanciales al sumar fuerzas sociales y parlamentarias, que desafiaban la historia de esas fracciones políticas, incluyendo el comportamiento parlamentario del radicalismo, el socialismo y de los representantes de los partidos de la izquierda tradicional. El proyecto nacional-popular se perfilaba así con más intensidad. Incluso Nestor Kirchner vio la conformación de “el campo” como un factor que indicaba la politización de la sociedad. Era evidente que no había un orden hegemónico establecido sino que se trataba de una disputa de dos bloques con pretensión hegemónica y bases sociales también en disputa.

En mayo del 2008 se hace presente en la escena política un grupo de varios cientos de intelectuales que reivindican la posibilidad de un apoyo crítico al proyecto nacional-popular sin asumir un carácter partidario y que iba seguir manifestándose a través de cartas periódicas.

1. **Tras el golpe, retomando la iniciativa**

En junio del 2009 el Frente para la Victoria, con Néstor Kirchner a la cabeza, fue derrotado en las elecciones de renovación parlamentaria y la oposición anticipó un triunfo en las elecciones presidenciales del 2011. Inmediatamente, Kirchner renunció a la Presidencia del PJ, que había tenido un comportamiento ambiguo en ese proceso eleccionario.

La renovación del Parlamento se concretaría en diciembre y el Frente para la Victoria iba a perder la mayoría. Antes que paralizarse, el gobierno retomó una sucesión de iniciativas que contribuirían a recuperar la legitimidad alcanzada antes del conflicto y las elecciones, haciendo evidente que legitimar el enfrentamiento desde el Estado frente al enemigo neoconservador y su programa neoliberal suponía un grado de hegemonía que no se basaba exclusivamente en los resultados económicos.

En agosto del 2009 el gobierno kirchnerista presentó al Parlamento la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se venía elaborando a través de un inédito proceso altamente participativo de la sociedad civil, apuntando a reducir el monopolio ejercido por grupos fuertemente concentrados, en especial el que encabezaba el diario Clarín, que se había vuelto un acérrimo opositor al gobierno, junto con las entidades agrarias. A la vez, la ley, que sería aprobada en octubre y tomada como ejemplo a nivel internacional, posibilitaba la multiplicación de iniciativas de comunicación de parte de la sociedad civil a lo largo del territorio, comprometiendo a las universidades a darles su apoyo, todo lo que podría interpretarse, junto con otras iniciativas, como parte de una guerra de posiciones. En el interín, la Presidenta apeló crecientemente al uso de cadenas nacionales y los medios estatales para contrarrestar a los monopolios privados, lo que la oposición calificó como una muestra del autoritarismo del gobierno y partidización de lo público. De hecho, la comunicación social se fue polarizando en dos bandos con audiencias afines y sin un grado aceptable de pluralidad. En la misma fecha, el gobierno acordó con Brasil en adoptar la norma japonesa para la televisión digital, mientras el Grupo Clarín prefería la norteamericana.

En agosto de 2009 se lanzó el programa Argentina Trabaja, que tenía como objetivo crear 100.000 empleos bajo la forma de cooperativas de trabajadores desempleados, principalmente para el área de la construcción. En el mismo mes se inauguró el programa “Futbol para Todos” que daba acceso gratuito a un espectáculo que había sido monopolizado por el grupo Clarín.

En septiembre de ese año se re-estatizó la empresa Aerolíneas Argentinas y Austral y en octubre se puso fin al sistema privado de administración de fondos de jubilaciones (AFJP) creando el SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) que iba a ser administrado por el estado a través de la ANSES. En ese mismo mes se pasó de una Secretaría a un Ministerio de Agricultura, ubicando a un político en esa posición.

En octubre del mismo año se expidió el Decreto 1602/09 estableciendo la Asignación Universal por Hijo (AUH) para todos los niños menores de 18 años cuyos padres se encontraran desocupados o trabajaran en la economía informal, buscando al mismo tiempo cubrir las necesidades mínimas de los niños que estuvieran en situaciones bajo la línea de [pobreza](https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza) vinculándolo al cumplimiento de la [escolarización](https://es.wikipedia.org/wiki/Escolarizaci%C3%B3n) y el control de la salud. Su alcance inicial se aproximaba a los 3 millones de niños. La medida contó con el apoyo de las centrales obreras y la Iglesia así como de una parte de la oposición partidaria. A iniciativa del poder ejecutivo, en noviembre el Parlamento aprobó una ley de despenalización de los delitos de calumnias e injurias en relación a cuestiones de interés público y la ley electoral que creaba las elecciones primarias internas y aseguraba equidad en la publicidad audiovisual de las campañas. En diciembre se crea el [Fondo del Bicentenario](https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_del_Bicentenario) (luego rebautizado como Fondo de Desendeudamiento), un fondo especial para garantizar el pago de los intereses de la deuda externa haciendo uso de las reservas del Banco central, lo que generó un conflicto y la posterior desafección del presidente del Banco Central, Martin Redrado. Ello impulsó los debates sobre la necesidad de reconsiderar la cuestión de la independencia del Banco Central y la necesidad de reformar la carta orgánica para permitir otros usos de los recursos del mismo.

No obstante esas numerosas iniciativas que permitieron recuperar la imagen del gobierno afectada tras el conflicto del campo, la crisis financiera internacional comenzó a hacer sentir sus efectos. El gobierno afirmó su orientación neokeynesiana respondiendo con incentivos a las empresas para frenar los despidos y políticas de crédito blando para favorecer el consumo de productos industriales y la construcción.

En julio del 2010 se iba a concretar otra iniciativa asociada a la afirmación de la dirección moral por parte del Kirchnerismo: la Ley de Matrimonio Igualitario que afirmaba los derechos humanos, acabando con una fuente legal de discriminación y ponía a Argentina a la cabeza de Sud América en esta materia.

Los festejos por el bicentenario del país, que suscitaron una inesperada participación de la población, y la prematura muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010, consolidaron la figura de Cristina Fernández de Kirchner (en adelante CFK) como la única líder política que podía ser garante de las políticas postneoliberales llevadas adelante desde 2003. Esta circunstancia se vería reflejada en su contundente triunfo electoral en las elecciones del año siguiente, lo que constituyó un fuerte respaldo y la garantía de continuidad por cuatro años más del proceso iniciado en 2003.

A partir del sepelio del ex presidente emergió una movilización, en buena medida espontánea, de ciertos sectores juveniles que se venían sintiendo convocados por la política y que iban a ir ganando presencia como movimiento social y político (“La Cámpora”) de soporte del proyecto kirchnerista. Simultáneamente se consolidaba un distanciamiento y luego un paso franco a la oposición de la Confederación General del Trabajo, que terminaría dividiéndose, resultando una fracción de apoyo al gobierno al que se sumaba el apoyo cada vez más evidente de la Confederación de los Trabajadores Argentinos, que agrupa principalmente empleados del estado, posteriormente también dividida. Como consecuencia, a pesar de sus políticas a favor de los trabajadores, el gobierno no pudo contar con un movimiento sindical unificado como parte del bloque social de apoyo, y la fracción opositora sumó gremios como el de camioneros, con poder suficiente para implementar huelgas generales, aunque sin una clara expresión político-partidaria.

En 2010 el Estado planteó una reapertura del canje de la deuda externa que había ofrecido en 2005. Un 15% de los bonistas aceptó los nuevos términos, totalizando un 91% del total de acreedores regularizados. Allí iban a aceptar canjearse 12.200 de los 18.300 millones de deuda vieja, para lo cual se emitieron nuevos bonos por casi 8000 millones, lo que significó un descuento de más del 35% para el Estado. Como resultado de la reestructuración, sumados ambos canjes- los de 2005 y 2010- el estado retiró bonos viejos defaulteados en 2001 por 74.000 millones y emitió bonos nuevos por 43.000, con lo cual la quita total fue de casi el 42%. Pero todavía había un 9% de los bonistas que no aceptaron ninguna reestructuración (en su mayoría los denominados “fondos buitres”), cuyas acreencias sumaban casi 7000 millones de dólares, que habían sido adquiridos en el mercado secundario, luego del default, cuando se los compraba por un precio que oscilaba entre el 10 y el 30% de su valor nominal. El posterior agudizamiento del conflicto con esos fondos, involucrando la confrontación con el sistema de justicia norteamericano y acciones de legitimación internacional de la estrategia planteada por el gobierno, iban a reafirmar la defensa de la soberanía nacional.

1. **El segundo gobierno de Cristina: los efectos de la “restricción externa”**

CFK ganó las elecciones con el 54% de los votos. Ya en marzo había anunciado que no iba a intentar modificar la constitución para permitir una tercera reelección. El año 2010 había sido económicamente muy favorable, aunque se había cerrado con la no aprobación del presupuesto por la oposición, lo que obligaba a asumir para el 2011 el mismo presupuesto. El año 2011 sería igualmente favorable en términos de tasa de crecimiento, casi 9%, la más alta de la región. Sin embargo, el gobierno de CFK tenía que lidiar con el aumento de la inflación, en particular en productos de la canasta básica, con el aumento del gasto por el pago de subsidios a las empresas de servicios públicos, con las crecientes importaciones de energía dado el aumento de la demanda en un contexto de desaceleración de la inversión del sector y falta de anticipación del gobierno, así como un aumento lento pero creciente de la fuga de capitales. Ese año registró una intensificación de la especulación sobre el dólar, la salida de ahorros y capitales y una importante caída de las reservas de divisas del Banco Central, lo que obligó a efectuar mayores controles cambiarios y aumentar las restricciones al acceso a dólares.

El segundo mandato mostraba así el pleno funcionamiento de la llamada “restricción externa”, que había condicionado a la economía argentina en casi toda su historia económica. Las restricciones a la remisión de utilidades al exterior así como a la compra de dólares para ahorro o viajes al exterior produjeron un creciente descontento de las distintas fracciones del capital y de los sectores medios que venían gozando de los mayores ingresos resultantes del modelo económico implementado y tenían capacidad de consumo con alto componente importado (como el turismo) y de ahorros que preferían asegurar en dólares. El empresariado retaceó aún más la inversión alegando el “desmanejo” macroeconómico del gobierno, la “inseguridad jurídica” y la poca efectividad para controlar la inflación. Los sectores medios, que veían reducido el poder de compra de los salarios, atacaban políticamente al gobierno con consignas como la inseguridad, la corrupción y el estilo verticalista del gobierno. Así como la figura de la líder suscitaba el afecto de las masas populares, la oposición centraba en ella su odio.

Una ley que, al menos simbólicamente, fue significativa, durante 2011 fue la referida a la limitación de la extranjerización de la propiedad de tierras. La extranjerización había alcanzado cifras muy altas, sin embargo subvaluadas por los mecanismos de uso de testaferros nacionales. Sin embargo la ley no dio lugar a medidas concretas para frenar o revertir el grado de extranjerización. Igualmente importante fue el nuevo régimen del trabajador rural, cuyo cumplimiento suponía la regularización de un 70 % de dichos trabajadores. Paradojalmente, esto suscitaba la oposición del sindicato que los venía representando en connivencia con los empleadores del sector. Este sindicato se uniría a un frente sindical de oposición, encabezado por el fragmento de la central obrera que se desvinculó del gobierno a raíz de que su demanda de lugares en las listas parlamentarias no había sido atendida por la presidenta. Esa base organizativa sería utilizada para realizar huelgas generales y asociarse con las fuerzas de oposición junto con la CTA disidente.

Dos episodios propiamente económicos de este período merecen destacarse dado el peso político de ambos en la construcción del poder político del gobierno. En primer lugar la decisión en 2012 de re-estatizar expropiando y no confiscando la empresa petrolera YPF, ante el incumplimiento de los compromisos de inversión del grupo español REPSOL y la necesidad de procurar el autoabastecimiento energético.

Por otro lado, se produjo la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para permitir el uso de las reservas para ser aplicadas al estímulo a proyectos de desarrollo productivo, lo que había estado vedado desde la convertibilidad.

Las tensiones económicas fueron en aumento y la caída de reservas iba a ser muy significativa al pasar de un record histórico de 52.100 millones en 2010 a 29.400 millones en enero de 2014, momento en que el Ministro de Economía Axel Kicillof decidió una devaluación del peso cercana al 20% y la subida de las tasas de interés bancarias. El aumento del control sobre las importaciones se hacía necesario ante la reducción del saldo de divisas y el comienzo de la desaceleración de la actividad económica, incluso de la industria, que persiste hasta este momento. Esto no contribuyó a disminuir la proporción de trabajo no registrado, que se había reducido considerablemente hasta 2009 pero que desde allí no pudo bajar del 33%. A su vez, la inflación comenzó a erosionar los aumentos salariales obtenidos en estos años por los sectores trabajadores sindicalizados, con lo cual se agudizó el descontento entre sectores beneficiarios del “modelo de crecimiento con inclusión social”. Al final del 2012 se produjeron manifestaciones coordinadas de protesta por el alza de precios.

El gobierno logró un triunfo al expedirse la Corte Suprema afirmando la Ley de Medios, a cuya inconstitucionalidad había apelado el grupo Clarín. La difusión en vivo de las argumentaciones en ese conflicto favoreció la legitimidad del gobierno. Sin embargo, nuevas apelaciones han demorado la aplicación de la Ley que obliga a los grupos concentrados a reducir su poder de mercado mediante la venta de sus activos. Este fue uno más de una serie de obstáculos que el sistema judicial impuso a iniciativas del poder ejecutivo, una parte del cual se convirtió en una corporación asociada a las fuerzas de la oposición. Aunque la desmonopolización del grupo Clarín fue bloqueada por sucesivas apelaciones a pesar de haber sido confirmada su constitucionalidad por la Corte Suprema, como ya se dijo, esa ley tuvo un fuerte efecto democratizante al poner en marcha el surgimiento de una multiplicidad de medios en todo el país.

1. **La crisis de los fondos buitres y el sostenimiento del “modelo”**

Intentando aumentar la inversión atrayendo capitales del exterior, cuyo acceso estaba vedado desde 2001 por la declaración del default, el gobierno intentó recomponer la situación con los acreedores externos. En función de ello se acordó en 2014 la indemnización a Repsol por la nacionalización de YPF y la deuda con los acreedores nucleados en el Club de París, pero no hubo acuerdo con otros acreedores como los bonistas que no entraron al canje de deuda de 2005, lo que derivó en la exacerbación del “conflicto de los fondos buitres”. Argentina fue obligada a pagar por un fallo de la justicia norteamericana, competente casi siempre de manera obligatoria en materia de contratos derivados de emisiones de deuda pública bajo la jurisdicción de Estados Unidos. La no aceptación de parte del gobierno argentino del fallo del juez norteamericano Griesa a favor de un grupo de bonistas, en lugar de condenar la posición argentina significó un rédito político para el gobierno a partir de la constatación de su voluntad de pagar y de lograr una generalización de la crítica internacional a los dudosos mecanismos globales de reestructuración de deudas soberanas.

Había recursos más que suficientes para pagar este fallo (su monto no era inicialmente tan elevado, alcanzando 1600 millones de dólares). Pero el hacerlo se hubiera podido producir una serie de eventos encadenados a partir de las cláusulas de igualdad de trato o de acreedor más favorecido. Paradójicamente, después de haber pagado puntualmente buena parte de la deuda remanente, podrían haber llevado la cuestión de la deuda a la situación de 2001, con una verdadera imposibilidad de pago. En todo caso, desde el punto de vista de los acreedores, Argentina no podía ser considerada rebelde pues se movía dentro de las reglas del juego internacionales. Argentina se encontraba en ~~situación objetiva~~ un proceso de reestructuración de deuda, situación objetiva aceptada desde 2005, lo que sin embargo no redujo en toda la década posterior y hasta la actualidad las calificaciones del riesgo país a que Argentina era sometida, manteniendo la dificultad para endeudarse a tasas aceptables. ya que se mostraba como un deudor con mala reputación en los mercados de capitales. El nudo de la controversia pasaba por la interpretación de la cláusula *paripassu*, que obliga a tratar con igualdad de trato y de pago a todos los acreedores, impidiendo que el estado elija a unos acreedores en desmedro de otros. Los “fondos buitres” alegaban que el gobierno la violaba al pagar a los bonistas reestructurados con una quita y reprogramación de sus vencimientos de sus deudas, y no a ellos mismos y por el total de sus acreencias. El juez Griesa les dio la razón. El gobierno ofreció pagarle a los houldouts a prorrata en los mismos términos que en el canje 2010 para garantizar así un trato igualitario. Pero estos no aceptaron y el conflicto sigue sin resolverse hasta el momento, siendo un punto sensible para la próxima administración.

La interpretación de la cláusula de igualdad de trato en el sentido dado por Griesa sentaría una jurisprudencia muy peligrosa para los Estados que quieran emitir deuda en dólares, bajo la ley norteamericana. Incluso pone en riesgo a Nueva York como plaza financiera para estas operaciones. El gobierno tomó la iniciativa de promover una resolución de las NNUU a favor de su propuesta de definir reglas no leoninas de reestructuración de la deuda, lo que fue acogido favorablemente por ese organismo. Sin embargo, el franco oposicionismo de los partidos llevó a expresiones tales como afirmar que la deuda debía ser pagada en los términos de fallo del juez Griesa, posición defendida por el actual presidente Mauricio Macri.

1. **El último año del kirchnerismo y el final de la posibilidad de continuidad**

El último año del gobierno de Cristina Fernández transcurrió con menos turbulencias políticas de la que avizoraban sus críticos, pero las señales del debilitamiento de la economía se hicieron presentes con intensidad. El gasto público se incrementó y la caída de reservas, luego del pago del vencimiento de un bono BODEN por 5900 millones de dólares en Octubre de este año, deja un saldo de 27.000 millones de dólares, un nivel similar al de diez años antes, en 2005.

En contrapartida, el gobierno siguió tomando iniciativas importantes, en particular referidas a la institucionalización como políticas de estado de varios de los derechos adquiridos, como la indexación por ley de las jubilaciones y las asignaciones familiares o la gratuidad de las carreras de grado en universidades públicas , haciendo más difícil a futuro su reversión por eventuales gobiernos de centro-derecha, y la concreción de la reforma al Código Civil, que al igual que la Ley de Medios resultaba de un prolongado proceso de audiencias públicas y que tiene una muy significativa repercusión en la ampliación de la garantía a derechos y la resolución de conflictos civiles.

Una cuestión pendiente es la de cómo sostener el modelo económico de crecimiento con inclusión adoptado ante la caída de los precios de las commodities y la recesión de orden mundial, incluyendo al Brasil, principal socio comercial de Argentina, a la vez que subsisten las restricciones de acceso al mercado de capitales. Como otros países de la región, el gobierno ha apelado a convenios de comercio e inversión con China y Rusia, reproduciendo a la vez el esquema de intercambio de materias primas por productos industriales y el endeudamiento. En todo caso, aumenta la probabilidad de un debilitamiento de los mecanismos de integración social por la vía de la redistribución y el aumento de la demanda interna y quedan algunas medidas económicas postergadas (ejemplo: revisión gradual de la política de subsidios) por el calendario electoral, que deberían ser implementadas. A esto se suman transformaciones estructurales pendientes, entre otras: del sistema impositivo, del sistema financiero, de profundización en la calidad de los sistemas de educación y salud, y el diseño de una estrategia de cambio de la matriz productiva en complementariedad con otras economías de la región.

El fin de los gobiernos de los Kirchner deja un balance complejoante una persistente oposición de centro derecha que ha mostrado tener capacidad para bloquear la continuidad del proyecto nacional-popular y que ahora gobierna.

Con el triunfo del centro derecha, puede anticiparse un fuerte ajuste del gasto estatal de corte neoliberal, y una liberalización de los mercados que afectarían a la industria y a la mayoría de los trabajadores incluyendo sectores de las clases medias, lo que traería un período de gran inestabilidad y resistencia de los sectores populares favorecidos por los gobiernos de NK y CFK, sumando fuerzas sociales con capacidad de bloquear el camino de restauración del proyecto neoconservador. En tal caso se sufrirían las consecuencias de la falta de organizaciones sociales autónomas que no fueron desarrolladas por el estilo de gobierno adoptado. El regreso de políticas neoliberales podría generar una afluencia de dólares de extranjeros y nacionales para adquirir activos abaratados por la devaluación, y un renovado endeudamiento externo que limitarían fuertemente las políticas de próximos gobiernos. Otra consecuencia importante sería el debilitamiento de las iniciativas de unidad regional como el Mercosur y la UNASUR, con propuestas como acordar tratados de libre comercio (o probablemente, buscar acercamientos a los recientes acuerdos Transpacífico), a lo que el kirchnerismo se venía resistiendo.

En todo caso, la alternancia en el poder se está realizando en forma ordenada, por la vía de elecciones libres y dando la imagen de que es el final de un ciclo de reformas que han marcado el pasaje a un período post-neoliberal, que habrá que ver en qué medida se han consolidado material y simbólicamente. O, por el contrario, hasta donde los límites que experimenta el modelo económico construido y el no haberse avanzado a tiempo y suficientemente en algunas reformas estructurales importantes facilitan una restauración nacional del proyecto neo-conservador de la mano de Mauricio Macri, que ganó las elecciones presidenciales en el ballotage del 22 de noviembre, cuenta con la reelección de su fuerza para la Capital Federal y venció por primera vez al FPV en la provincia de Buenos Aires y en buena parte del Conurbano, donde predominan sectores populares y suelen decidirse las elecciones nacionales. Todo lo cual constituye un preocupante escenario para los proyectos post-neoliberales, tanto en Argentina como en el resto de América Latina.

Durante su primer mes de gobierno Macri se mostró decidido a restituir el neoliberalismo de la manera más brutal y contundente. El nuevo gobierno está mostrando su decisión de revertir las políticas y el estilo de gobierno de la década kirchnerista, a la que asocian mediáticamente con la “corrupción” y el desorden institucional. Se trata pues, de un intento de restauración del orden hegemónico neo-conservador que está buscando imponerse en el tiempo más corto posible y cuyo éxito estará medido por la capacidad de resistencia de los sectores más perjudicados a estos ajustes. Asociado a esto, el nuevo gobierno se posicionó en contra de los procesos de las nuevas izquierdas, especialmente de Venezuela, y comenzó a ubicarse como aliado del proyecto neoconservador y los países que lo sostienen, particularmente Estados Unidos. Con ello espera contar con el apoyo internacional del BM y el FMI (ya se anunció que se volverá a aceptar el monitoreo de las políticas estatales por este organismo) y profundizar la pérdida de empuje de UNASUR. Ya se ha puesto en marcha una negociación con los principales bancos internacionales para incorporar capitales en base a la emisión de bonos de deuda. Macri retoma la participación de Argentina en el Foro de Davos y ha designado como funcionarios de alto nivel a un gran número de ex CEOs de grandes empresas nacionales e internacionales.

En muy poco tiempo el gobierno levantó los controles cambiarios sobre el dólar, avanzó sobre los empleos públicos no renovando innumerables cantidad de contratos aduciendo abiertamente que eran militantes kirchneristas, nombró jueces en la Corte Suprema por decreto y avanza con la idea de una “auditoria” en todos los niveles de gobierno. Los precios mostraron una nueva alza y las negociaciones salariales deberán ser discutidas en marzo bajo un clima enrarecido por la virulencia de las medidas aplicadas, que hasta ahora logran un preocupante consenso en la población, esta vez de signo neo-conservador. Por lo pronto el Ministro de Economía amenazó con que, de exigirse altos salarios, la variable de ajuste será la desocupación. Es de hacer notar que la expectativa del gobierno de que los sectores exportadores concretaría la venta de los granos acumulados esperando la devaluación, y aportarían a las reservas del Banco Central no se han cumplido, expresando una presión de dichos sectores para una mayor depreciación del peso. Asimismo, la elección de ministros y de directores de las empresas públicas, en un gran porcentaje ex CEOs de empresas internacionales, el desarmado de la Ley de Medios y la toma de decisiones que abiertamente benefician al grupo mediático que comandó la oposición al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y los primeros gestos en relación a las organizaciones de derechos humanos y las protestas sociales que no habían sido criminalizadas por los gobiernos Kirchneristas confirman que las promesas de diálogo y sostenimiento de las “buenas cosas” que habrían hecho esos gobiernos no se verá realizada.

Veremos cómo se van produciendo los acontecimientos pero indudablemente se ha producido un cambio de signo regresivo en el proceso argentino. Puede preverse que los procesos que estamos estudiando no son lineales y ascendentes sino que pasarán por crisis de diverso tipo que podrán llevar a perder el control de los gobiernos como en este caso. Eso pone en un lugar privilegiado el análisis de las estrategias seguidas y del carácter no monolítico ni exento de contradicciones de las fuerzas que buscan crear otro orden hegemónico opuesto al global dominante. Por ejemplo, buscaremos examinar si se apuntó a transformar la estructura productiva creando nuevos sujetos socioeconómicos, así como a profundizar la democracia cambiando la cultura política de las mayorías, generando otro Estado y otra relación con una sociedad civil organizada, con diferencias pero compartiendo un proyecto nacional y popular desde posiciones autónomas y con capacidad para defender lo logrado y prepararse para superar esta coyuntura. En el mismo sentido, habrá que constatar si se sostuvo el proyecto inicial de fortalecimiento de las nuevas instancias de ámbito latinoamericano que se generaron en las primeras décadas y que hoy serían un recurso fundamental para evitar un efecto dominó. Entre otras, estas son condiciones que parecen esenciales para que la pérdida de las elecciones no se convierta en una fácil ocupación del mismo estado y sus recursos, ahora instrumentalizables por el proyecto neoconservador. Se abre en Argentina una etapa de revisión de lo actuado por las fuerzas progresistas, con la tentación de caer en extremos tales como la autoflagelación o la crítica total, por un lado, y el panegírico de todo lo hecho por el otro. Este es un caso que muestra la importancia de encarar con pensamiento crítico el proyecto de investigación DR&RD como un momento de reflexión y aprendizaje valioso para todos los países cubiertos.

**Bibliografía de referencia**

Aronskind, Ricardo (2015):“Intuiciones y confrontaciones. Para pensar la política económica.” En *Márgenes. Revista de Economía Política*, Ano 1, Num. 1, Agosto de 2015, Universidad Nacional de General Sarmiento.

Aronskind, R. y Vommaro, G. (comp) (2010): *Campos de batalla. Las rutas, los medios y las plazas en el nuevo conflicto agrario*, UNGS/Prometeo, Los Polvorines.

Azpiazu, Daniel y Martín Schorr (2003): “La renegociación de los contratos entre la administración Duhalde ¿Replanteo integral de la relación estado-empresas privatizadas o nuevo sometimiento a los intereses de estas últimas?”, *Realidad Económica* Nº 193, pp. 8-28.

Azpiazu, D. y Schorr, M. (2010); Hecho en Argentina. Industria y economía, 1976-2007, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires.

Arceo, N. y Wainer, A. (2008); “La crisis de la deuda y el default. Los distintos intereses en torno a la renegociación de la deuda pública”, Área de Economía y Tecnología de la flacso, Documento de Trabajo N.° 20, Buenos Aires.

Basualdo, E. (2006); Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo xx hasta la actualidad, Buenos Aires, Siglo xxi.

Basualdo, E. y Kulfas, M. (2002); “La fuga de capitales en la Argentina”, en Gambina, J. (comp.); La globalización económico-financiera. Su impacto en América Latina, clacso, Buenos Aires.

Carenzo, S. y Míguez, P. (2009): “Acumulación, desposesión y regulación social en tiempos de crisis” en *La primera crisis global del siglo XXI. Miradas y reflexiones, publicado por CLAES / D3E,* Centro Latinoamericano de Ecología Social**,** Montevideo.

Coraggio, José Luis y Jean-Louis Laville, Reinventar las izquierdas en el Siglo XXI. Hacia un diálogo Norte-Sur, UNGS/IAEN/CLACSO/DR&RD, Buenos Aires y Quito 2014.

Coraggio, José Luis (2015); “Economía Social”, Proyecto DR&RD, IAEN, <http://drrd.iaen.edu.ec/wp-content/uploads/2015/04/Econom%C3%ADa_social.png>

Coraggio, José Luis (2015); “Sobre las relaciones entre economía, democracia y revolución”, (a ser publicado en Cadernos PROLAM/USP, Sao Paulo).

Damill, M. y Frenkel, R. (2013); “La economía argentina bajo los Kirchner: una historia de dos lustros”, en Iniciativa para la transparencia financiera. Disponible en: http:// www.itf.org.ar/pdf/documentos/91\_2013.pdf.

Gaggero, J. y Rossignolo, D. (2011); “El impacto del presupuesto sobre la equidad (Argentina, 2010)”. Documento de Trabajo N.° 40, cefid-ar, Buenos Aires.

Gaggero, A.; Schorr, M. y Wainer, A. (2014); Restricción eterna. El poder económico durante el kirchnerismo, Futuro Anterior, Buenos Aires.

Míguez, P., Filadoro, A. y Anino, P. (2009): “Elementos para reflexionar acerca de la crisis”, en *Revista Ciencias Sociales*, Nº 73, Junio de 2009, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Pucciarelli, Alfredo (2006), Los años de Alfonsin. ¿El poder de la democracia o la democracia del poder?, Siglo XXI, Buenos Aires.

Pucciarelli, Alfredo (Comp.) (2011), Los años de Menem. La construcción del orden neoliberal, Siglo XXI, Buenos Aires.

Pucciarelli, Alfre y Ana Castellani (2015) (Comps), Los años de la Alianza. La crisis del orden neoliberal, 2da edición, Siglo XXI, Buenos Aires.

Rinesi, Eduardo y otros (comp) (2010), Si este no es el pueblo. Hegemonía, populismo y democracia en Argentina, UNGS/IEC, Los Polvorines, Pcia de Buenos Aires.

Schorr, M. (coord.); Argentina en la posconvertibilidad: ¿desarrollo o crecimiento industrial? Estudios de economía política, Miño y Dávila, Buenos Aires.

Svampa, M. y Pereyra, S. (2003); Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras. Buenos Aires: Editorial Biblos.

Torres Galarza. R. (2014); “Las revoluciones en democracia, las democracias en revolución”, en Coraggio, J. L. y Laville, J. C. (org.), Reinventar la izquierda en el siglo XXI. Hacia un diálogo norte-sur. UNGS-CLACSO-IAEN, Buenos Aires.

Varesi, Gastón (2010): “La Argentina posconvertibilidad: modelo de acumulación”, *Problemas del Desarrollo* Nº 161, pp. 141-63.

1. Una primera versión de este trabajo fue presentada en el Coloquio de Medellín (CLACSO, noviembre 2015) del proyecto “Democracias en revolución & revoluciones en democracia” que contó con los comentarios de Ricardo Aronskind a quien se agradece. [↑](#footnote-ref-1)
2. Instituto del Conurbano. Universidad Nacional de General Sarmiento. [↑](#footnote-ref-2)
3. Instituto de Industria. Universidad Nacional de General Sarmiento. [↑](#footnote-ref-3)
4. Una excepción fue el programa (no cabalmente logrado) de impulso masivo a la formación de organizaciones socio-productivas bajo régimen de propiedad social comunal, impulsado por la Revolución Bolivariana en Venezuela. [↑](#footnote-ref-4)
5. Por “economicismo” entendemos las hipótesis que reducen todos los comportamientos individuales a motivaciones relacionadas al cálculo del máximo interés material, y en particular crematístico. Esto excluiría determinantes tales como el racismo, la discriminación de género, las religiones, el rechazo a la presencia de los sectores populares en la escena pública, la oposición ideológica a determinadas corrientes políticas (anticomunismo, antiperonismo, etc.) o la adscripción acrítica a paradigmas o modelos como el de la sociedad norteamericana y sus gobiernos. A lo que se agrega la manipulación de los miedos. [↑](#footnote-ref-5)